



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: JAVIER ALONSO ARBOLEDA ARBOLEDA  
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -  
COLPENSIONES- Y LA ADMINISTRADORA DE FONDO DE  
PENSIONES Y CESANTÍAS -PORVENIR S.A.-  
Radicado: 05001 31 05 008 2019 00416 01  
Sentencia: S-148

### **AUTO**

Se reconoce personería judicial para actuar en representación de LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. al Dr. JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SIERRA, conforme al poder especial otorgado mediante escritura pública N°0885 del 28 de agosto de 2020, suscrita por la Vicepresidente de la sociedad PORVENIR S.A., Dra. SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad demandada PORVENIR S.A. en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 25 de agosto de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

JAVIER ALONSO ARBOLEDA ARBOLEDA demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además el pago de costas y agencias en derecho.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 07 de julio de 1984; que se trasladó al Régimen de Ahorro Individual -RAIS- en el mes de octubre de 2002; que no fue debidamente asesorado, ni informado por esa administradora sobre las implicaciones y consecuencias de trasladarse, al RAIS. Que ha radicado documentación en Colpensiones para efectos de que sea declarada la nulidad de traslado, sin haber obtenido respuesta favorable. Agrega que la administradora privada no cumplió con sus obligaciones, evaluación de la situación pensional, la negociación del bono pensional, la densidad de semanas, la edad para pensionarse, omitiendo su deber de buen consejo. Por último dice que, la liquidación de la prestación en el RPMPD es por la suma de \$1.410.000, superior a la calculada si permaneciera en el RAIS, por el valor de \$828.116.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES dice que le consta la fecha de afiliación del actor al ISS, pues ello se desprende de la historia laboral allegada al proceso y la reclamación presentada ante esa entidad relacionada con el traslado al RPMPD. Frente a los demás hechos dijo que no le constan, pues son situaciones particulares del demandante ajenas a Colpensiones. Se opuso además a las pretensiones bajo el argumento que carecían de fundamento legal y fáctico. Como excepciones propuso inexistencia de la nulidad o ineficacia en el traslado de régimen, devolución de cuotas de administración, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, prescripción, excepción innominada y compensación.

Por su parte, PORVENIR S.A. dice que no es cierto que HORIZONTES S.A. hoy PORVENIR S.A. haya dado una mala información al actor sobre su traslado a esa administradora, por cuanto otorgó una asesoría integra, veraz y oportuna desde el momento de la afiliación, documento público que se presume auténtico. Agrega dicha administradora siempre garantizó el derecho al retracto, circunstancia que fue comunicada en prensa, donde se daba la posibilidad a los afiliados de trasladarse entre regímenes. Manifiesta que no le consta la afiliación del demandante al ISS, tampoco la reclamación presentada ante esa entidad de traslado de régimen, pues son hechos relacionados con un tercero ajeno a esa administradora. Como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y excepción genérica.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 25 de agosto de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, *i)* DECLARÓ la ineficacia del acto jurídico del traslado que hizo el demandante, del Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones a, la HORIZONTES S.A, hoy PORVENIR S.A.; *ii)* Ordenó además a PORVENIR S.A., que en virtud del regreso automático al RPMPD administrado por COLPENSIONES, devuelva a

dicha entidad pública todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del ahora demandante, tales como cotizaciones, sumas adicionales de las aseguradoras, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, incluyendo las cuotas de administración; *iii*) Ordenó a COLPENSIONES para que permita el traslado del actor del RAIS al RPMPD, conservando los beneficios que el demandante tenía al momento de su traslado de régimen; *iv*) condenó en costas a PORVENIR S.A.; *v*) fijando como agencias en derecho la suma de \$877.803.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el fallo de primera instancia, toda vez que esa administradora, de manera palmaria cumplió con la carga procesal impuesta, en la medida que aportó los documentos para demostrar la vinculación producto de una decisión libre e informada, con el formulario de vinculación y con la conducta del afiliado que permaneció en esa entidad.

Dice que no se le puede imponer carga distinta a la administradora a la existente en las leyes vigentes, pues esto constituiría una violación al debido proceso y la confianza legítima de la entidad, ya que para cuando se celebró ese acto jurídico, no solo los afiliados eran capaces, sino que el acto se considera que tiene objeto y causa lícita.

Agrega que, aunque se declare la ineficacia de la afiliación, no se puede desconocer el contenido del artículo 113 de la ley 100 de 1993 que establece que, en caso de cambio de régimen, sólo se traslada el saldo y los rendimientos; además, el bien administrado produjo frutos y mejoras según la buena gestión de la administradora, haciendo rentar el patrimonio del afiliado, sin que sea posible que se ordene ese traslado de cuotas de administración.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, PORVENIR S.A. presentó dentro del término alegatos de conclusión, insiste en que no le asiste razón a la falladora de primera instancia, por cuanto en este asunto no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen de la parte demandante, pues no se alegó y menos probó ningunas de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación con esa administradora es eficaz. Agrega que, la parte demandante realizó cambio de régimen con Porvenir S.A., de forma libre y voluntaria, en el cual se le brindó una información oportuna y completa, como lo aseveró al suscribir el formulario de afiliación con esa administradora.

Por otra parte, dice que no se debe ordenar la devolución de sumas diferentes a las indicadas en citado literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, por cuanto ningún otro valor está destinado a financiar la prestación del afiliado, por lo que condenar a pagar valores adicionales, configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre la parte demandante y PORVENIR S.A., como lo es COLPENSIONES; pero además, determinar que se deben reintegrar los gastos de administración y las primas de seguros, es tanto como ordenarle a una compañía de seguros a que si no se presenta el siniestro amparado, devuelva el valor de la póliza. Por lo anterior solicita sea revocada la sentencia de primera instancia.

COLPENSIONES al descorrer el traslado para alegar, insta en que en el evento de confirmarse la condena de primera instancia, en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado y la orden dada de trasladar a Colpensiones todos los valores recibidos con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses,

los rendimientos que se hubieran causado, se adicione la sentencia, en el sentido de CONDENAR a la sociedad PORVENIR S.A. a realizar la devolución de los gastos de administración y seguros previsionales debidamente indexados al momento del pago. Y en igual sentido, el porcentaje de garantía de pensión mínima debe ser devuelto a Colpensiones, teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a la sociedad Porvenir S.A.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver el tema propuesto por la apoderada de PORVENIR S.A. a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del Sr. JAVIER ALONSO ARBOLEDA ARBOLEDA realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A. queda en la obligación de devolver.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **(i)** JAVIER ALONSO ARBOLEDA ARBOLEDA nació el 18 de noviembre de 1963; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 05 de julio de 1984, acumulando en esa entidad un total de 340.29 semanas, conforme a la historia laboral allegada por la parte demandante; **(iii)** el 05 de mayo de 2003 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP HORIZONTES S.A.; **(iv)** en el mes de julio de 2003 se trasladó a la AFP HORIZONTES S.A. hoy PORVENIR S.A. entidad en la que se encuentra actualmente afiliado.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS

administrado en este caso por la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que*

*la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del art. 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar ad portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el



alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que este pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *“en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen”* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de

un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al art. 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, “La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración (las comisiones por administración), la prima de reaseguros y las primas de invalidez o sobrevivientes, porcentaje de garantía de pensión mínima, tema cuestionado en el recurso de apelación de PORVENIR S.A., basta con

indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que un trasunto natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en la sentencia 68838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 – 2008, SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, en las cuales se dijo que:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del 12 Rdo. 05001 31 05 007 2019 00167 01 actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, **con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil**, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado. “Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, **ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido**, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del Código Civil” (Resalta la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos

producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

Lo anterior fue ratificado en la sentencia de la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, en la que se dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional. (...)*

*Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).*

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada también en este aspecto.

No es procedente la indexación de la anterior suma, según se solicita en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia por Colpensiones, pues se trata de una cuestión que debió plantearse en la contestación de la demanda o recurrirse ante este Tribunal, de manera que una decisión en tal sentido implicaría decidir más allá de lo pedido, lo que no resulta procedente en sentencias de segunda instancia.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. a favor del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 08 Laboral del Circuito de Medellín, el día 25 de agosto de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso. En constancia firman.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N°113  
del 30 de junio de 2021

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6572f77881859504faa4acad239418831431be591a890370404ccc597b400499**

Documento generado en 29/06/2021 11:32:34 AM